

Las causas de las crisis son objeto de debate y de investigación para los economistas. Identificarlas supone un avance en el conocimiento económico y, sobre todo, proporciona herramientas para entender –y atajar– nuevos procesos recesivos. La Gran Recesión, la última gran crisis económica antes de la explosionada por la COVID-19, aporta lecciones de gran interés que, de hecho, están sirviendo a políticos y agentes económicos y sociales para la aplicación de medidas concretas sobre la experiencia ya conocida. A su vez, la crisis vírica infiere otro factor determinante: la revisión de reglas y preceptos de la economía convencional, de manera que se han abierto perspectivas distintas que están obligando a repensar recetas consideradas como inamovibles. El fenómeno se extiende a reconsiderar el propio pensamiento económico.

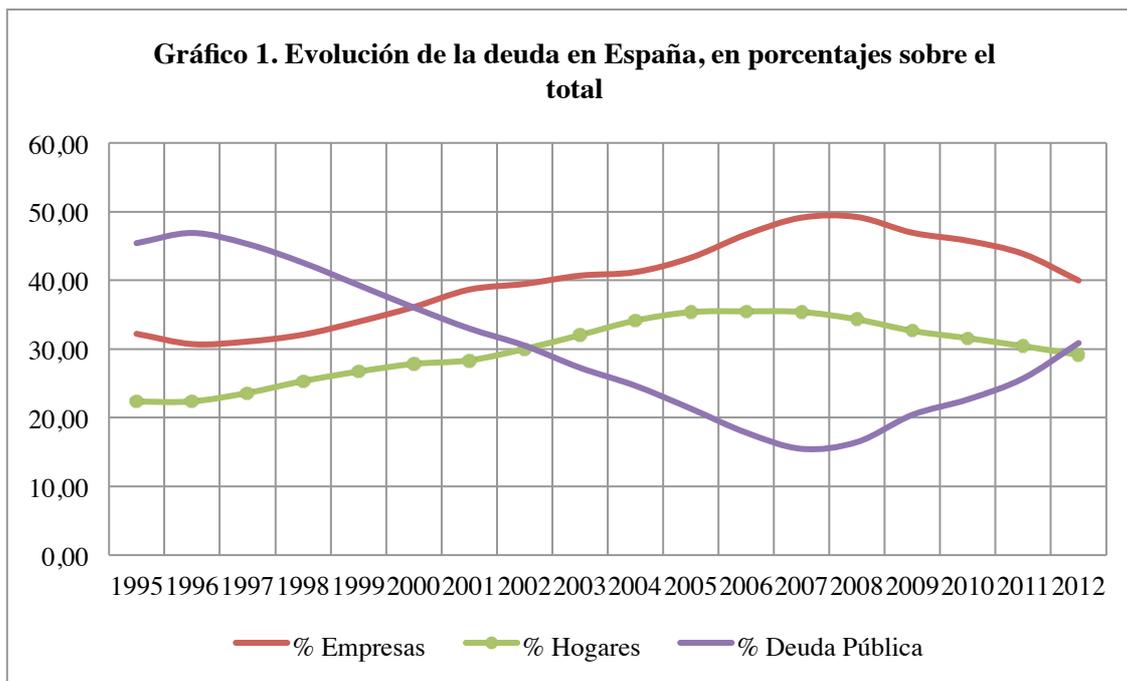
En la Gran Recesión, las políticas económicas impulsadas, de carácter procíclico, no hicieron más que agravar la situación: recortes y medidas de contracción para resolver el tema del déficit. Es muy cierto que la mayor parte de los gobiernos, de las universidades y de los gabinetes de estudios económicos no fueron capaces de prever lo que se venía encima. Pero no es menos verdad que las primeras medidas que se pusieron en marcha a partir de la caída de Lehman Brothers (incluso algo antes) contribuyeron a que la recesión no se tradujera en depresión. Medidas, recuérdense, de corte keynesiano, impulsoras de la demanda agregada y de despreocupación por la evolución de las deudas y los déficits. Aquéllas y éstos son consecuencias de la crisis; no son su causa. Si se pierde de vista esto, se yerra en el diagnóstico y en las actuaciones a desarrollar.

Ahora bien, vamos a recordar aquí uno de los factores importantes de la Gran Recesión: el incremento de la deuda privada. La crisis financiera conforma una de las piezas de la crisis: de alguna forma, como nos enseña la historia económica, ese suele ser un detonante central. De las finanzas, la tormenta pasa a las economías privadas con el aumento de la desconfianza, la reducción del crédito, la ralentización de la actividad productiva, el cierre gradual de empresas, la caída por tanto de pedidos y el aumento del paro. La consecuencia sobre las economías públicas es que sus ingresos se desmoronan, y sus capacidades para encarar la atonía privada devienen cada vez menores.

El proceso ha enganchado un volumen ingente de deuda privada, muy superior a la pública. Pero el resuello se aplica sobre el sector público: debe reducirse, adelgazarse, mejorarse, racionalizarse, póngase el verbo que se quiera. En todos sus tiempos, la síntesis parece evidente: lo público debe recortarse porque, al hacerlo –se piensa–, todo será más eficiente y, por consiguiente, la recuperación será próxima. Pero los orígenes del problema están en el ámbito privado, a partir de desencadenar una enorme burbuja de exuberancia irracional, tal y como demuestran los trabajos más recientes de Steve Keen (*La economía desenmascarada*, Capitán Swing, Madrid, 2015; *¿Podemos evitar otra crisis financiera?*, Capitán Swing, Madrid, 2021). Ese y no otro es el punto de partida de la catástrofe; no la economía pública. El caso español es ilustrativo, como se recoge en la tabla 1 y en el gráfico 1.

Tabla 1
Evolución de la deuda de España (no financiera), 1995-2012, en millones de euros

Años	Empresas	% Empresas	Hogares	% Hogares	Pública	% Deuda Pública	Total
1995	200.951	32,25	139.075	22,32	283.076	45,43	623.102
1996	209.353	30,72	152.531	22,38	319.600	46,90	681.484
1997	228.771	31,10	173.724	23,61	333.199	45,29	735.694
1998	260.877	32,10	205.910	25,33	345.968	42,57	812.755
1999	312.648	33,97	245.895	26,72	361.775	39,31	920.318
2000	374.706	36,11	288.850	27,84	374.033	36,05	1.037.589
2001	443.160	38,66	325.034	28,35	378.247	32,99	1.146.441
2002	496.280	39,48	377.300	30,02	383.435	30,50	1.257.015
2003	569.895	40,69	448.724	32,04	382.032	27,28	1.400.651
2004	650.284	41,20	538.881	34,14	389.142	24,66	1.578.307
2005	796.644	43,29	650.997	35,38	392.497	21,33	1.840.138
2006	1.023.807	46,68	778.372	35,49	391.055	17,83	2.193.234
2007	1.213.756	49,13	874.404	35,39	382.307	15,48	2.470.467
2008	1.306.998	49,22	911.283	34,32	436.984	16,46	2.655.265
2009	1.298.607	46,93	903.342	32,65	565.082	20,42	2.767.031
2010	1.301.631	45,76	898.146	31,58	644.692	22,66	2.844.469
2011	1.255.386	43,85	870.960	30,42	736.468	25,73	2.862.814
2012	1.144.339	39,98	834.265	29,14	883.873	30,88	2.862.477

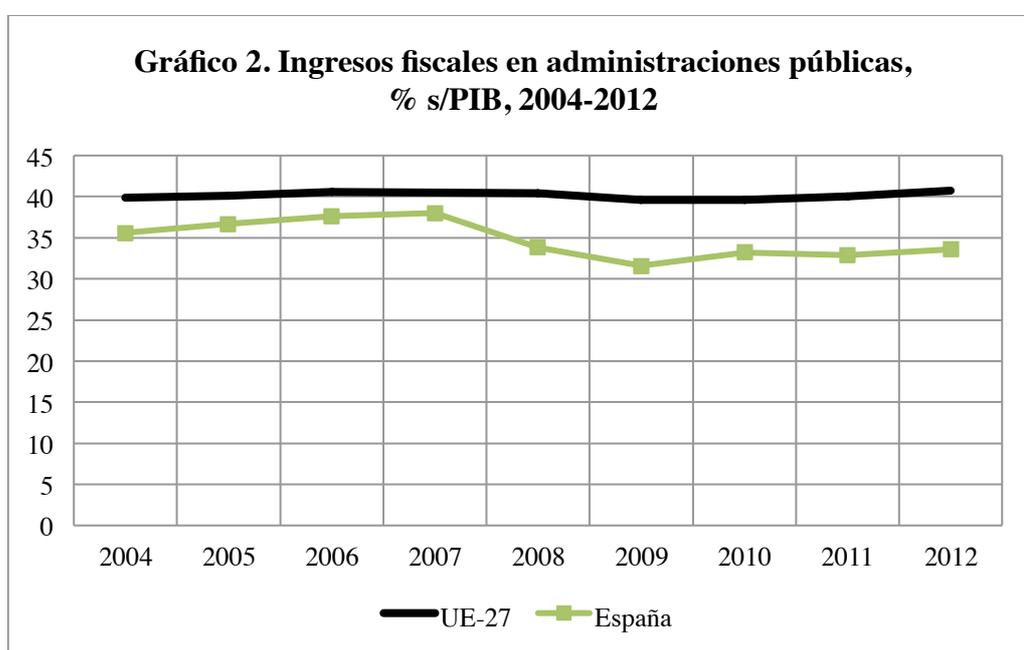


FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Banco de España.

La deuda pública tuvo una tendencia claramente a la baja desde 1995 hasta 2007; mientras que la privada conoce un proceso inverso: aumenta hasta el punto de pasar del 54 por ciento del total en 1995 al 70 por ciento en 2012, en una evolución ascendente. El año 2007 marca el punto de inflexión: la deuda pública avanza, mientras que la privada retrocede: las administraciones incrementan sus débitos acuciadas por las consecuencias de la Gran Recesión, en un escenario de contracción de ingresos. En España, además, las cifras son claras: los ingresos fiscales de las administraciones públicas se encuentran siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea de los 27, de forma que al desplome de las entradas en la hacienda pública debe añadirse su ineficiencia recaudatoria. Dicho de otra manera: existía –y existe– en España un “margen tributario” todavía destacable, en relación a la media comunitaria; falta, empero, una reforma fiscal que corrija bases imponibles y que repiense una cesta de impuestos distinta.

Tabla 2. Ingresos fiscales en administraciones públicas, 2004-2012, porcentaje sobre PIB

Años	UE-27	Alemania	Grecia	España	Francia	Italia	Portugal	Reino Unido
2004	39,9	39,7	33,4	35,6	45,1	40,7	33,8	36,4
2005	40,1	39,7	34,4	36,7	45,6	40,3	34,9	37
2006	40,6	40	33,4	37,6	45,9	42	35,6	37,7
2007	40,5	40	34,3	38	45,2	43	35,9	37,2
2008	40,4	40,2	34,2	33,8	45	43	35,9	38,7
2009	39,6	40,8	32,8	31,6	44,1	43,3	34,5	36,1
2010	39,6	39,3	33,9	33,2	44,5	42,8	34,8	36,8
2011	40	39,9	34,9	32,9	45,7	42,8	36,2	37,5
2012	40,7	40,4	36,6	33,6	47	44,3	34,9	37,1



FUENTE: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_tax_ag&lang=en.

La expansión de la deuda pública no obedece a despilfarros generalizados ni a excesos implementados desde el sector público: las administraciones reducían sus pasivos mientras que familias y empresas los aumentaban. Pero el golpe letal de la crisis promovió enjuagues de deuda desde la esfera privada –con contracciones notables en el consumo y en la inversión– y la necesidad del sector público de cubrir inversiones –parcas en el ámbito empresarial y doméstico– y gastos sociales. En este contexto, y a partir de una perspectiva más general, la Gran Recesión sirvió de pretexto para apuntalar premisas ideológicas ultraconservadoras. Lo vimos en Estados Unidos, con un Partido Republicano dominado por la derecha extrema. Lo apreciamos en Europa, con

una ideología presidida, durante la Gran Recesión, por un calvinismo de austeridad mal entendida.

Pero resulta difícil explicar a la gente que es despedida, o a la que se recortan sus prestaciones en dependencia, o se le alarga una operación por falta de recursos, o se le masifican las aulas, que todos esos sacrificios son para cuadrar un indicador, el déficit, que se ha convertido en un tótem. Si la economía como disciplina no piensa en el bien común, será también muy común que las personas se acaben alejando no de la economía, sino de la política.